**LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO
DE VENEZUELA
EN LA DEMANDA DE GUYANA ANTE
LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA
DR. JUAN CARLOS SAINZ BORG***

* Abogado, Especialista y Doctor en Derecho por la Universidad Central de Venezuela. Master por la Universidad de Oxford. Investigador del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela. Profesor y Decano de la Universidad para la Paz. Naciones Unidas. San José Costa Rica. Las opiniones expresadas son a título individual y no comprometen a ninguna de las instituciones mencionadas.

INTRODUCCIÓN

La representación en el litigio incoado por Guyana contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha sido conducida, de forma pública y oficiosa, por parte del Gobierno encabezado por Nicolás Maduro, a través de las gestiones de la Vicepresidenta Ejecutiva. Esto se ha materializado en la entrega de diversas comunicaciones a la CIJ, sin que hasta la fecha la República se haya hecho parte en el caso.

Sin embargo, la representación del Gobierno de Venezuela es un hecho disputado en la esfera internacional, tanto a nivel político como a nivel jurídico y diplomático. Por tanto, la representación oficial de la República Bolivariana podría ser ejercida también por el Gobierno encabezado por Juan Guaidó, basado en un conjunto de argumentos jurídicos, procesales y diplomáticos que presentaremos de forma sucinta a continuación. Esta posible doble representación se produce como la consecuencia de la aplicación de las normas procedimientos aprobadas por la propia Corte y la ambigua situación política que presenta el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el entorno internacional. El propósito de este artículo es evaluar algunas de las soluciones que podrían ser tomadas en cuenta por la propia Secretaría de la Corte Internacional de Justicia o incluso por la propia Corte en una decisión como parte del caso.

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según su Carta Fundacional, tal y como lo explica el Art. 2 del Estatuto de la CIJ: “*La Corte será un cuerpo de magistrados independientes...*”. Como podemos observar, el tratado fundacional en la materia deja claro que la CIJ es un tribunal de

derecho, independiente de los criterios y decisiones del trabajo político que desarrolla la ONU en sus diferentes foros.

Este hecho es, además, común en el trabajo de la ONU. Por una parte, es el trabajo político y la toma de decisión que representa la voluntad creada a partir de la conjunción de voluntades de todos sus miembros. Pero al mismo tiempo, por la otra, existe una ONU que es técnica y jurídica, como imperativo de los mandatos producidos por los estados miembros. La organización ha establecido tribunales, comités de expertos, comités de investigaciones, relatores y un sinnúmero de entidades con mandatos técnicos o judiciales. Estas entidades, provienen de un mandato político, pero que se deben a su naturaleza técnica o jurídica, como órganos independientes.

En relación con la Corte Internacional de Justicia, la Carta de la ONU establece los fundamentos del funcionamiento de la institución e igualmente regula quienes pueden participar como partes en la Corte en el Artículo 93:

“Todos los Miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Un Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas podrá llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo con las condiciones que determine en cada caso la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.”

En seguimiento de la Carta de la ONU, para que un estado pueda participar en la Corte debería ser en primer lugar miembro de la Organización de las Naciones Unidas, aunque no está excluido que un país no miembro pueda ser llevado a juicio o presentar un caso, ya que cada situación sería manejada de acuerdo a la casuística política por parte del Consejo de Seguridad como deja claro el texto de la Carta.

Es interesante señalar, que esta referencia de la capacidad de un estado para participar en un proceso ante la Corte Internacional de Justicia según el criterio del Consejo de Seguridad, es una de las varias referencias que existen en el derecho internacional al máximo órgano del sistema de la ONU. Por ejemplo, según el Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional, según el artículo 13.b. el Consejo de Seguridad puede remitir *“al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes”*. Igualmente puede suspender, según el artículo 16, hasta por un año una investigación o juicio que pudieran abrir tanto la Corte Penal Internacional como su Fiscalía

Sin embargo, en este caso no está en debate la membresía por parte del estado en la organización, sino el gobierno o el poder ejecutivo, que representa a este estado. Este tema es parte de uno de los perennes debates del derecho internacional público, sobre la diferencia entre reconocimiento de estado y de gobierno.

RECONOCIMIENTO DE ESTADO, GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN EN UN JUICIO INTERNACIONAL

Las relaciones internacionales son un elemento fundamental en el mundo contemporáneo, donde los estados son los sujetos primarios, pero en ningún caso los únicos. El intercambio que genera la globalización obliga a los estados a desarrollar un conjunto de acciones y obligaciones para poder administrar este complejo proceso. En este escenario formulado para los estados, conviven un conjunto de entidades no gubernamentales de toda índole, públicas y privadas, que articulan el proceso de globalización que vivimos. En este contexto, el ejercicio de la función del estado viene liderada en gran medida por el gobierno o poder ejecutivo, aunque otros agentes del estado también desarrollan una función más limitada pero no menos importantes, como el caso del poder ejecutivo y los tribunales.

La legalidad y legitimidad de quien ejerce el poder ejecutivo bien sea la presidencia o la jefatura del estado es un problema de derecho interno. Según afirma Antonio Remiro Bretons, cuando hay un problema de reconocimiento de gobierno, “el problema es, esencialmente, de representación del Estado. Si una de las partes cuenta con una legitimidad constitucional de origen, lo que procede es mantener su reconocimiento como representante del Estado, reconociendo a la otra u otras, en su caso, según la efectividad de su control territorial, el estatuto de insurrectos o beligerantes”.¹

La legitimidad constitucional es entonces un tema de carácter interno y que los miembros de la comunidad internacional deben decidir en el marco de sus relaciones con el resto de los miembros de esta. Para algunos estados quien ejerza el gobierno es un asunto de carácter interno, no sujeto a debate político, basado en el antiguo principio de no intervención en los asuntos del estado. Para otro grupo, en este caso mayoritario en el mundo

¹ Antonio Remiro Bretons. Derecho Internacional. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia. p. 81.

occidental, monitorear la forma como se eligen los gobiernos, a través de la observación electoral y el establecimiento de criterios para esos gobiernos, como en las llamadas cláusulas democráticas, se constituye en eje fundamental de su gestión, como en el caso de los organismos regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Unión Europea, por mencionar algunas de las agrupaciones que mantienen estrictos criterios para admitir gobiernos o con los cuales desarrollar una cooperación.

En el caso de la Organización de las Naciones Unidas, como ente global y universal, se ha planteado siempre un postural neutral. Se explica de esta forma:

“El reconocimiento de un nuevo Estado o Gobierno es un acto exclusivamente atribuido a otros Estados y Gobiernos. Generalmente implica la disposición a establecer relaciones diplomáticas. Las Naciones Unidas no son un Estado ni un Gobierno, y por lo tanto, no tienen la autoridad para reconocer un Estado o Gobierno. Como organización de Estados independientes, puede admitir nuevos Estados como miembros o aceptar las credenciales de los representantes de un nuevo gobierno.”²

Asimismo, la ONU explica en su página web la forma como los Gobiernos son admitidos en el seno de la Organización, lo cual se realiza por una decisión de los propios estados, en una entidad que se denomina Comisión de Verificación de Poderes.

“En cada período de sesiones, la Asamblea General examina las credenciales de todos los representantes de los Estados Miembros que participan en el período de sesiones. Este examen se lleva a cabo en la Comisión de Verificación de Poderes, compuesta por nueve miembros, pero puede ocurrir en otros momentos; se puede plantear la cuestión de si un representante ha sido acreditado por el Gobierno que está en el poder. Esta cuestión se decide en última instancia por una mayoría de votos en la Asamblea. Cabe mencionar que los cambios normales de gobierno, por ejemplo mediante elecciones democráticas, no plantean

² Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo obtiene un nuevo Estado o Gobierno el reconocimiento de las Naciones Unidas? Disponible en <https://www.un.org/es/about-us/about-un-membership>. Consultado Mayo 2022.

*problemas con respecto a las credenciales de los representantes del Estado de que se trate.*³

Como se puede evidenciar, el tema de los cambios de gobiernos es un hecho normal de las relaciones internacionales y en general se resuelve de manera sencilla en la mayoría de los casos, aunque hay algunos casos que han representado un gran problema en el mundo de las relaciones internacionales y que han sucedido por la naturaleza del nuevo estado o por el caso de un gobierno. Por ejemplo, el caso de la República Española frente a la España Franquista; el caso de la China Nacionalista, luego devenida en Taiwán y la China Comunista. Otros casos famosos fueron el caso de Camboya bajo el régimen de Pol-Pot o los cambios en el régimen talibán en el caso de Afganistán.

El caso de Venezuela en este sentido no es único o nuevo, pero que procede de una profunda crisis política interna, donde un conjunto de estados reconoce por un lado al Gobierno interino del Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó y otro conjunto de países que reconoce al Gobierno de Nicolas Maduro. El propósito de este artículo no es analizar el caso interno venezolano, si no señalar las consecuencias que esta crisis de legitimidad interna podría representar para el caso en litigio ante la CIJ.

LA REPRESENTACIÓN ANTE LA ONU Y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES

La representación del Gobierno Interino encabezado por Juan Guaidó está avalado por un conjunto de países, fundamentalmente democráticos y occidentales que le han dado la visibilidad y estabilidad para el establecimiento de representaciones diplomáticas. Hasta la fecha unos 50 estados reconocen el Gobierno de Juan Guaidó,⁴ donde destacan países fronterizos de Venezuela, Estados Unidos, Canadá y europeos, especialmente el Reino de los Países Bajos, sede la CIJ.

En el ámbito multilateral, el problema dista de ser una posición pacífica. En los organismos multilaterales de carácter regional donde Venezuela desarrolla sus acciones, la representación está en manos del

³ Ibidem.

⁴ Política Exterior Juan Guaido. Wikipedia. Disponible https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Guaidó. Consultado Mayo 2022.

Gobierno liderado por Juan Guaidó. Por ejemplo, en el caso de la Organización de Estados Americanos, el tema fue sometido a votación en el seno del Consejo Permanente el 9 de abril del 2019 con la Resolución CP/RES. 1124 (2217/19). La votación que se obtuvo de la totalidad de los miembros de la organización fue: dieciocho votos afirmativos, nueve negativos, seis abstenciones y una ausencia. Es interesante destacar que Guyana, país con el cual presentó el caso objeto del presente artículo se abstuvo de votar.

Es interesante revisar, brevemente las consideraciones de la Resolución CP/RES.1124 antes mencionada, en las cuales se explica las razones de la aceptación del representante del Gobierno interino, Gustavo Tarre Briceño. El preámbulo de la Resolución⁵ establece 4 motivos fundamentales, basados en 6 considerandos, que son la base de la decisión:

1. La importancia de la democracia en la región y las obligaciones que se derivan del artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana.
2. Las previas resoluciones de la Asamblea General de la OEA, en las cuales declaraban las faltas de garantías del proceso electoral que declaró presidente a Nicolás Maduro, en particular AG/RES. 2929 (XLVIII-O/18) del 5 de junio de 2018.

⁵ Organización de Estados Americanos. Consejo Permanente el 9 de abril del 2019. Resolución CP/RES. 1124 (2217/19). “REAFIRMANDO el derecho de los pueblos de las Américas a la democracia y la obligación de sus Gobiernos de promoverla y defenderla, como se establece en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana; RECORDANDO que a través de la resolución AG/RES. 2929 (XLVIII-O/18) del 5 de junio de 2018, la Asamblea General declaró que el proceso electoral del 20 de mayo de 2018 en Venezuela carecía de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, el incumplimiento de los estándares internacionales y por llevarse a cabo sin las garantías necesarias para un proceso democrático libre, justo y transparente; TOMANDO NOTA que a través de la resolución CP/RES. 1117 (2200/19) del 10 de enero de 2019, la OEA destacó la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional de Venezuela, elegida democráticamente, y resolvió no reconocer la legitimidad del nuevo mandato de Nicolás Maduro; TENIENDO PRESENTE el artículo 80 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, así como el artículo 3 del Estatuto del Consejo Permanente; TOMANDO NOTA de la carta del 22 de enero de 2019 enviada por la Asamblea Nacional de Venezuela al Secretario General de la OEA; y RECONOCIENDO que la autoridad presidencial de Nicolás Maduro carece de legitimidad y que sus nombramientos para cargos públicos, por lo tanto, carecen de la legitimidad necesaria. Disponible en www.oas.org. Consultado, Mayo 2022.

3. El reconocimiento de la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional de Venezuela por parte del Consejo Permanente de la OEA CP/RES. 1117 (2200/19) del 10 de enero de 2019,
4. La decisión del Consejo Permanente de la OEA no reconocer la legitimidad del nuevo mandato de Nicolás Maduro, mediante la Resolución del Consejo Permanente de la OEA CP/RES. 1117 (2200/19) del 10 de enero de 2019,

Estas razones, basadas en resoluciones previas de la OEA, podrían ser trazadas antes de las mencionadas por la propia Resolución, ya que el tema de las elecciones en Venezuela había sido tratado reiteradamente por el organismo regional.

Es interesante mencionar que el Representante del Gobierno de Nicolás Maduro, expresó un conjunto de razones por las cuales no estaban de acuerdo con la decisión tomada por la OEA, en la cual reiteraban el concepto del reconocimiento de gobierno antes mencionado en el artículo de la siguiente forma:

“1. La República Bolivariana de Venezuela considera que la OEA no tiene autoridad para reconocer o desconocer a los gobiernos de sus Estados Miembros, esa autoridad no existe y no está prevista en ningún instrumento jurídico. La primera razón es muy sencilla, el acto de reconocer a un gobierno es una acción individual y soberana de cada Estado, y como acto político no puede ser impuesto a otros Estados pues estos perderían así su propio derecho soberano a gobernar sus relaciones internacionales. Esto explica que en ningún momento en el pasado se haya intentado poner en práctica esta violación del derecho internacional”

La representación del Gobierno de Venezuela en la ONU se produjo a través del Comité de Verificación de Credenciales, conformado por 9 estados en el año 2019 en la ocasión de la presentación de la presentación del Gobierno de Maduro. El Comité de Verificación integrado por los siguientes países: Barbados, Botsuana, China, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Mauricio, Nepal, San Marino y Uruguay. La presidencia del mencionado Comité la obtuvo la representante de Barbados, la Sra. H. Elizabeth Thompson.⁶

⁶ United Nations. Report of the Credentials Committee: General Assembly, 74th sesión. Disponible en <https://digitallibrary.un.org/record/3838802?ln=es>. Consultado en Mayo 2022.

En la Resolución A/74/572 se explica en procedimiento, de la siguiente manera:

“Como se indica en el párrafo 1 del memorando del Secretario General, habían presentado credenciales oficiales emitidas por el Jefe de Estado o de Gobierno o por el Ministro de Relaciones Exteriores, en la forma dispuesta en el artículo 27 del reglamento de la Asamblea General,”

La decisión de la aceptación de un gobierno por parte del Comité de Verificación se somete a votación en el plenario de la ONU. La decisión se presenta en forma de proyecto de resolución que será votado al inicio de las sesiones de la Asamblea General.

En este caso, en el seno del Comité solo los Estados Unidos de América expresaron reservas sobre la representación en manos Gobierno de Nicolas Maduro en los siguientes términos:

“La delegación de los Estados Unidos de América se desvinculó de la aprobación de la resolución de la Comisión únicamente en lo relativo a la aceptación de las credenciales presentadas por la representación de Maduro en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, e indicó además que, en cuanto a las notas distribuidas por la Comisión con respecto al Estado Plurinacional de Bolivia, los Estados Unidos tenían entendido que las notas diplomáticas presentadas debidamente serían tramitadas por Protocolo con arreglo a la práctica habitual.”

Como se puede evidenciar el proceso de toma de decisiones entre el organismo universal, ONU y el organismo regional OEA es muy diverso y esta podría ser una de las razones que explicará la dualidad de la decisión y el gran desafío que representa para la comunidad internacional tener a un gobierno que en un foro regional está representado por un gobierno y en otro foro está representado por otro.

En la OEA el proceso de acreditación de gobiernos es parte de las deliberaciones del órgano ejecutivo de la organización, el Consejo Permanente. Las decisiones son razonadas por cada uno de los gobiernos en el proceso de votación. En el caso de la ONU es un mecanismo formal, delegado por razones prácticas a un comité que “verifica”, es decir, toma en cuenta las formalidades de las acreditaciones remitidas por los gobiernos según los gobiernos y las prácticas diplomáticas. Este mecanismo meramente

formal, funciona probablemente por razones de carácter práctico, ya que los más de 190 estados que conforman la ONU, no podrían expresarse uno por uno sobre cada una de las acreditaciones sin que se invirtieran horas innecesarias de trabajo.

Sin embargo, creemos que es muy importante destacar la representación en la OEA, ya que, en virtud de la propia Carta de la ONU, en el Capítulo VIII, le da la mayor preponderancia para la búsqueda de soluciones a las controversias que pudieran presentarse en el seno de los organismos regionales de la siguiente forma:

“Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuerdos o que constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad”.

Este mandato jurídico de la Carta de la ONU, en el cual se da preponderancia a las resoluciones regionales, podría representar un criterio válido para el establecimiento de la legitimidad del gobierno que representa a un estado internacionalmente.

LA REPRESENTACIÓN ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Como hemos afirmado a lo largo del presente artículo la CIJ es un tribunal en derecho, independiente de las racionalidades políticas de la ONU y que opera como una corte en derecho de cualquier parte del mundo. Las normas procesales de la CIJ están establecidas en su Estatuto y Reglamento.

El artículo 42 del Estatuto establece que las partes estarán representadas por agentes y podrán tener ante la Corte, consejeros o abogados. El Reglamento de la Corte desarrolla el Estatuto y explica en su artículo 38.5 que *“todos los actos realizados en nombre de las partes después de haberse incoado un procedimiento serán efectuados por agentes”*. En el párrafo 2 del artículo *“se establece que cada agente deberá indicar un domicilio en la ciudad de La Haya al que se enviarán todas las comunicaciones relativas al asunto de que se trate y se precisa que las comunicaciones enviadas*

*a los agentes de las partes se considerarán que han sido enviadas a las propias partes”.*⁷

En este sentido, el tratadista J.J. Quintana explica las diferencias entre el agente y la representación legal. “Se distingue entre la representación política del Estado que es parte en un caso, la cual es llevada a cabo por un “agente” y la representación legal, encarnada en aquellos profesionales del derecho internacional que son contratados por los Estados para que les presten sus servicios profesionales en calidad de abogados”.⁸

El agente del estado, “es el único representante autorizado de cada Estado parte ante la Corte”, además es el “canal de comunicación oficial entre el gobierno y tribunal”. Agrega además el antes mencionado autor: “En la práctica, el agente supervisa y coordina el equipo de la defensa y tiene la responsabilidad de trazar la estrategia de defensa y de firmar todos los **alegatos** y comunicaciones que se dirijan a la Corte. Firma también las **conclusiones** finales (*sumisiones* o *conclusions*) del Estado que representa ante la Corte, las cuales pueden constituir la parte más importante de cada alegato de defensa”.⁹

En la práctica desarrollada ante la Corte, los estados designan como agente al Embajador del Estado acreditado ante el Reino de los Países Bajos, con sede en la Haya. También es común que designen como agentes “una alta autoridad interna en el plano jurídico, como el Ministro de Justicia, el Fiscal General o el Asesor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores. También sucede frecuentemente que se designa a uno o más co-agentes, quienes deben compartir con el agente la tarea de representar al Estado ante la Corte.”¹⁰

El papel del representante del Estado ante el país anfitrión de la Corte, en este caso el Reino de los Países Bajos, tiene un papel fundamental, desde el punto de vista práctico porque se establece una dirección para el envío de las correspondencias o comunicaciones, tal y como establece el Reglamento de la Corte, pero también desde la perspectiva política porque se afianza la legitimidad del aparato diplomático del estado. En el caso que nos ocupa, el Reino de los Países Bajos reconoció al Gobierno interino de

⁷ Juan José Quintana. *Diccionario Jurídico de la Corte Internacional de Justicia*. Editorial Tirant Lo Blanch. Bogotá. 2021. p. 360.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ibidem*.

Juan Guaidó, este reconocimiento se realizó, además, de forma bilateral y luego como uno de los países que conforma la Unión Europea.

El Gobierno Holandés ha sido muy claro respecto al cumplimiento de los requisitos democráticos en el caso de Nicolas Maduro. “En un comunicado, el ministro holandés de Exteriores, Stef Blok, explicó que, “tras la expiración del ultimátum puesto a (el presidente venezolano Nicolás) Maduro el 26 de enero” para que convocara elecciones “libres, transparentes y democráticas”, Holanda procede a cumplir con su advertencia y reconoce a Guaidó como “presidente interino” de Venezuela”.¹¹

Es importante registrar en este artículo, asimismo, la adhesión del Reino de los Países Bajos a las sanciones aprobadas por la Unión Europea contra miembros del Gobierno encabezado por Nicolas Maduro. La prensa internacional reportó en diciembre del año 2021 la negativa del Gobierno Holandés en permitir el aterrizaje de un avión propiedad del Gobierno de Venezuela y que viajaría, según informaciones ofrecidas por el Gobierno encabezado por Nicolas Maduro como un “vuelo diplomático”. En palabras de los oficiales del Gobierno se explica de la siguiente forma: “Nuestra delegación sería trasladada en un vuelo no comercial de Conviasa (aerolínea estatal sancionada por Estados Unidos), en un vuelo oficial, con condición de vuelo diplomático, este avión se mueve por el mundo”.¹²

El cumplimiento de las sanciones aprobadas por la Unión Europea, en virtud del proceso antes mencionado de no cumplimiento de los mínimos democráticos en cuanto a la celebración de elecciones en Venezuela, en un criterio importante de carácter jurídico para determinar la legitimidad y legalidad del Gobierno que representa a Venezuela en la sede del tribunal.

En ningún caso, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia o el Reglamento de la Corte hace referencia al reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas o ningún otro criterio particular para poder otorgar la posibilidad de presentarse en el juicio.

¹¹ La vanguardia. Holanda reconoce a Guaidó como “presidente interino” de Venezuela. Disponible en: <https://www.lavanguardia.com/politica/20190204/46194407884/merkel-reconoce-a-guaido-como-presidente-interino-legitimo-de-venezuela.html>. Consultado en Mayo 2022.

¹² Venezuela denuncia que Países Bajos negó vuelo a delegación de Maduro que viajaría a la CPI. Disponible en <https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211213-venezuela-denuncia-que-pa%C3%ADses-bajos-negó-vuelo-a-delegación-de-maduro-que-viajar%C3%ADa-a-la-cpi>. Consultado en Mayo 2022.

LA SITUACIÓN ACTUAL

El Gobierno de Venezuela ha decidido no hacerse parte en el caso, es decir, no litigar el caso presentado por Guyana. Ni el Gobierno encabezado por Nicolás Maduro, ni el Gobierno liderado por Juan Guaidó.

En la primera fase del caso, el Gobierno de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro estuvo en permanente comunicación con la Secretaría de la Corte enviando cinco comunicaciones, junio de 2018, abril del 2019, en noviembre del 2019, en febrero del 2020 y en julio del 2020. En relación con la Memoria presentada por Guyana, presentó un memorándum como respuesta.¹³ En el caso del Gobierno liderado por Juan Guaidó no ha presentado ningún acto procesal o documentación ante la Secretaría de la Corte.

Es importante mencionar que los dos gobiernos, tanto el que lidera Maduro como Guaidó, llamados en los medios de comunicación como oposición y gobierno, en el marco de una de las periódicas reuniones de diálogo, celebrada en Septiembre del año 2021 firmaron un **“Acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba”**.¹⁴

En el acuerdo se plantea la ratificación de los derechos históricos sobre el territorio Esequibo y acordó lo siguiente:

“Segundo: Expresar nuestro desacuerdo con la decisión de la Corte Internacional de Justicia de atribuirse jurisdicción para conocer sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899, a partir de la demanda unilateral de Guyana.

Tercero: Realizar un nuevo llamado a Guyana para que retome el camino de las negociaciones directas con el Estado venezolano, a fin de alcanzar un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio, canalizando de esa manera de forma amistosa la resolución de la controversia, en

¹³ Memorandum of the Bolivarian Republic of Venezuela on the Application filed before the International Court of Justice by the Cooperative Republic of Guyana on March 29th, 2018. Disponible en <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/171/171-20191128-WRI-01-00-EN.pdf>. Consultado, Mayo 2022.

¹⁴ Venezuela. Asamblea Legislativa. Acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Disponible en: <http://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/acto/acuerdo-en-respaldo-y-ratificacion-a-guayana-esequiba-20210921223812.pdf>. Consultado en Mayo 2022.

apego al Derecho Internacional y con base en el Acuerdo de Ginebra de 1966.”¹⁵

Este acuerdo político es parte del proceso de diálogo entre el llamado Gobierno de la República Bolivariana y la Plataforma Unitaria de Venezuela, en el marco de los acuerdos firmados en México el 13 de agosto de 2021 y ratificado por la Asamblea Legislativa y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

En el texto se rechaza la decisión de la Corte Internacional de Justicia y solicita a los dos países que busquen un arreglo amistoso en el marco del derecho internacional. En este caso, en cumplimiento de derecho internacional, el camino abierto es continuar con el litigio ante la Corte Internacional de Justicia.¹⁶ La idea de que el Gobierno de Guyana negocie con Venezuela un retiro del caso de la Corte Internacional de Justicia, para adelantar negociaciones bilaterales directas no parece posible en este momento. Sin embargo, la diplomacia es el arte de lograr acuerdos.

Este acuerdo político ratifica la posición de la representación del Gobierno que lidera Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo valida la idea que ambas representaciones tienen la legitimidad necesaria para presentarse ante la Corte Internacional de Justicia para litigar el caso iniciado por Guyana.

CONCLUSIONES

La dualidad de la existencia de dos gobiernos en el territorio de Venezuela es una situación poco común e irregular en el marco de las relaciones internacionales, en especial en América Latina. El proceso que desembocó en la pérdida de la legitimidad del Gobierno que encabeza Nicolás Maduro, estaba basado en un conjunto de anuncios, resoluciones y decisiones adoptadas por la comunidad internacional y que estaban basados en graves situaciones sobre las elecciones desarrolladas en ese país, documentadas ampliamente en misiones de observación internacionales. Igualmente, en el país se vive una crisis en materia de derechos humanos que ameritó la

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Para una ampliación del litigio en el caso Guyana vs. Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, ver: Sainz Borgo, Juan Carlos. La recuperación del Esequibo. Anotaciones desde la perspectiva procesal. *Revista de derecho público*. No. 167-168. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas.

apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la activación de diversos mecanismos internacionales, como la “Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela” creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o las acciones tomadas por la Secretaría General de la OEA.

El Gobierno liderado por Juan Guaidó tiene una clara legitimidad internacional, por el apoyo que le ofrece el Gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, el Gobierno encabezado por Nicolás Maduro, disfruta de los criterios de efectividad en el control del territorio y del gobierno del país, y también cuenta con un número de apoyos internacionales importantes, como el caso de Rusia y China. Pero elaborar sobre cuál es la mejor representación o las opciones que ofrecen no es el objeto de este artículo.

La idea que queremos expresar en este artículo es visibilizar las consecuencias de esta dualidad de gobiernos, reconocidos por diversos países y organismos de la comunidad internacional, y presenta el desafío para el trabajo de la Corte Internacional de Justicia, ya que a nuestro juicio cualquiera de los dos gobiernos podría presentarse ante la Secretaría y ejercer la defensa de los intereses del Estado.

En este sentido, quisiera concluir con las siguientes ideas:

1. La representación ante la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia no es un hecho que dependa exclusivamente del reconocimiento que el Gobierno respectivo tenga en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Una cosa es la representación política en el seno de la ONU y otra son sus dictámenes en órganos jurídicos e independientes que forman parte del Sistema.

2. Los criterios para determinar qué gobierno puede ejercer la representación de Venezuela ante el caso presentado por Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, deben ser criterios jurídicos tomados en consideración por la Secretaría de la Corte o por la Corte Internacional de Justicia en pleno.

3. El derecho aplicable para determinar la legalidad de la representación de Venezuela, debe considerar el mandato de la Carta de la ONU en su Capítulo VIII cuando le otorga preeminencia a las soluciones regionales antes que las globales, así como el conjunto de decisiones adoptadas por el órgano regional hemisférico, en el marco de la protección de la democracia

basadas en la Carta Democrática Interamericana. Asimismo, es importante tomar en consideración las decisiones de otros órganos regionales, como el Parlamento Europeo, MERCOSUR, el Parlamento Latinoamericano, MERCOSUR, por nombrar algunos.

4. El reconocimiento del Gobierno de los Países Bajos del Gobierno encabezado por Juan Guaidó le otorga a este la base jurídica necesaria para presentar las actuaciones procesales que se requieran para la defensa de los intereses de Venezuela, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento y la práctica de la Corte Internacional de Justicia.

5. Los casos ante la Corte deben litigarse. El conjunto de decisiones de la Corte ha demostrado que la no comparecencia es una decisión que no contribuye con la administración de la justicia, la determinación de una solución y la construcción de una paz sustentable en el tiempo.

6. Las fuerzas políticas en controversia en Venezuela deben establecer un protocolo de actuación para que las mejores personas, con conocimiento en la materia, puedan presentarse de forma conjunta ante la Corte para defender los intereses del país. Las pérdidas territoriales del país ocurridas en el siglo XIX fueron el fruto de grandes divisiones y conflictos internos. No hagamos del siglo XXI una continuación de esas graves decisiones.